

La seguridad alimentaria y nutricional de Colombia, una prioridad

Para nadie es un secreto que Colombia enfrenta problemas estructurales crecientes que afectan su desarrollo y causan inestabilidad económica, social y política, entre ellos se cuenta la inequidad y la pobreza. Resultado de tales problemas se presentan fenómenos como el desempleo, el hambre, la malnutrición, la inseguridad alimentaria y nutricional de su población. Si bien los indicadores del estado nutricional han evolucionado de manera positiva, todavía el 13% de los colombianos está subnutrido, el 13,5% de los menores de 5 años presenta desnutrición crónica y la tasa de muertes por desnutrición es de 5 por cada cien mil habitantes.

Según el informe sobre el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo SOFI 2013, publicado por la FAO, Colombia es el país de la Alianza del Pacífico con más personas en estado de desnutrición, y también es el único que no ha logrado cumplir con los objetivos del milenio, pese a tener un crecimiento económico sostenido desde 2011.

Puesto que la seguridad alimentaria y nutricional está relacionada con factores económicos, sociales, políticos, demográficos y culturales, desde la siembra, la producción, la distribución y el consumo, hasta la utilización biológica de los alimentos, toda medida de política económica nacional o de comercio internacional que afecte el sistema alimentario repercute finalmente en la situación alimentaria y nutricional de la población.

Para conocer la situación de la seguridad alimentaria y nutricional en Colombia, existen varios indicadores los cuales han sido clasificados según los componentes de la seguridad alimentaria y sus determinantes definidos por la FAO. Los ejes que definen el concepto de seguridad alimentaria y nutricional son: a) Disponibilidad de alimentos; b) Acceso físico y económico a los alimentos; c) Consumo de alimentos; d) Aprovechamiento o utilización biológica y e) Calidad e inocuidad.

Indudablemente la estabilidad alimentaria está relacionada con la variación climática, la variabilidad de precios, la capacidad tecnológica, la disponibilidad de tierra cultivable, el nivel de ingresos y la situación social. Por factores como el comportamiento cíclico de la producción y los daños de orden climatológico o fitopatológico, especialmente, en alimentos como frutas, hortalizas, plátanos, papas y tubérculos, la oferta alimenticia ha sido inestable (CONPES, 2008). En Colombia la inflación de los alimentos presentó una disminución significativa al pasar de más del 30% en 1990 al 15% en 1993 y al 5,43% en 2011. La Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad MESEP concluyó que si la inflación de alimentos hubiera sido igual a la inflación total, la indigencia en 2008 no habría sido de 17,8% sino de 16,2%. Es decir, el efecto adicional de la inflación de alimentos sobre la indigencia nacional fue de 1,6 puntos porcentuales.

En ciencia y tecnología en el sector agropecuario, el presupuesto público no ha aumentado en la proporción que debería haberlo hecho a fin de atender las urgentes necesidades de modernización del sector. Por tanto la tecnología se concentra en los grandes productores; para los medianos y pequeños, la prestan en forma limitada las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATAS), y más recientemente los Centros Provinciales de Gestión Empresarial. (Minagricultura, 2005)

Como la disponibilidad de alimentos está determinada por la productividad, la diversificación de la producción, la cantidad y variedad de los recursos naturales, la capacidad de importar, la tasa de crecimiento del sector agropecuario presenta un comportamiento inestable. En los últimos años se ha recuperado la confianza de los productores y se ha disminuido el riesgo que ha caracterizado la inversión en el campo, lo cual se refleja en el crecimiento del 4% en la superficie cultivada, al pasar de 3.8 millones de hectáreas en el 2002 a 5.1 millones de hectáreas en el 2011. (Minagricultura, 2011)

Los tratados internacionales de libre comercio, recientemente firmados, presentan desventajas para la agricultura nacional, debido a la producción y distribución de alimentos subsidiados provenientes de los países desarrollados. A esto debemos agregar las restricciones por los altos costos del transporte por tonelada/kilómetro, que se estiman para el país en seis centavos de dólar, mientras el estándar internacional es cercano a un centavo (WEF, 2003).

En cuanto al uso de la tierra, sólo un 4% corresponde a explotaciones agrícolas (Minagricultura, 2004a). En relación con la distribución de la tierra, se reconoce que, no obstante se haya actuado sobre 52 millones de hectáreas, la reforma agraria no ha logrado modificar la estructura de la propiedad. La mayor actividad ha consistido en la titulación de baldíos (85% aproximadamente), y las reformas de la estructura de la propiedad han incidido apenas sobre 6.5 millones de hectáreas (12,5%) (FAO). El sector rural se ha caracterizado por una histórica distribución desigual de la propiedad de la tierra, y la mayoría de los pequeños productores se ubican en áreas con suelos de inferior calidad. Esta situación afecta la producción de los bienes básicos, puesto que la agricultura campesina conserva una participación elevada, estimada entre el 35% y el 45% de la oferta productiva (ICBF, 2005).

En cuanto al acceso a una alimentación de calidad, determinado por el empleo, la inclusión social, y la diversificación de ingresos, se presenta la siguiente situación: millones de pobres en Colombia no comen por falta de dinero. A la pregunta: ¿Por falta de dinero alguna persona del hogar dejó de consumir las tres comidas uno o más días a la semana?, realizada por el DANE, el 8,3% de los hogares colombianos respondió afirmativamente, esto equivale a una población de unos 3,5 millones de habitantes.

No es equivocado afirmar que en Colombia la inseguridad alimentaria y nutricional está asociada con los problemas estructurales del país como la desigual distribución de los ingresos, las altas tasas de desempleo, el conflicto interno, la pobreza y los bajos ingresos que no alcanzan a cubrir el valor de la canasta familiar.

Por otra parte la institucionalidad de la seguridad alimentaria y nutricional muestra gran complejidad y dispersión. Esta amplia gama de instituciones, participantes y sectores incide en la inseguridad alimentaria y nutricional, debido a la desorganización sectorizada del Estado, a las ineficiencias del sistema para concertar acciones y evitar la dispersión de recursos y esfuerzos y a la proliferación de instancias decisorias que impiden acciones oportunas y efectivas, y en ocasiones facilitan la corrupción. Existe una gran cantidad de normas dispersas que generan confusión en los participantes del sector agroalimentario, muchas de ellas desactualizadas y las vigentes tienen poca difusión. (DNP, 2005b)

El enfoque planteado en este editorial es el de evidenciar la complejidad de la situación alimentaria y nutricional. Por lo tanto, abordar los problemas desde esta visión implica analizar la dinámica de los procesos económicos, políticos, ambientales y sociales propios del País en relación con un mundo globalizado, donde se privilegia el crecimiento económico y la acumulación de los recursos en manos de ciertos grupos económicos por encima del ejercicio pleno de los derechos humanos. Así como la globalización implica mejoramientos sustanciales en la calidad de vida y en la seguridad alimentaria y nutricional de los Países del Primer Mundo, con frecuencia se incrementa la dependencia económica, política, cultural y comercial de los países, y también significa la ampliación de las inequidades en el estado nutricional y de salud de las personas, porque disminuye la capacidad de los países, en especial de los llamados del Tercer Mundo, para definir sus propias políticas, promueve el desempleo y la generación de empleo disfrazado, causa mayor concentración de la riqueza e impulsa un patrón de consumo universal. Condiciones que disminuyen la disponibilidad y el acceso de la población a una alimentación adecuada. La historia de Colombia ha estado marcada por la exclusión de los beneficios del desarrollo en contra de un amplio sector de la sociedad, por la inequidad en la distribución de la riqueza generada, lo cual ha propiciado y alimentado conflictos sociales de diferente naturaleza. Esta amplia gama de factores agudiza las inequidades en el estado alimenticio y nutricional de la población.

Todo lo anterior le plantea a las Instituciones de Educación Superior, a las Universidades, a las Empresas y a los Centros de Decisiones Públicos y Privados, una reflexión profunda desde su responsabilidad social universitaria y empresarial, a fin de impulsar investigaciones que impliquen creación de valor compartido, generación de respuestas concretas y viables para abrir caminos hacia una real seguridad alimentaria y nutricional en el País, orientadas a mejorar la calidad de vida de la población y a contribuir a la equidad social y por tanto a la tan anhelada paz.